

Mesa XIV Sistema Electoral y Partidos Políticos

Desafíos en la implementación del voto activo de las personas en prisión preventiva

Nalleli Rangel¹
Luis Alberto Campos²

Resumen

En el presente trabajo se planteará un estudio de alcance descriptivo a través del análisis de la implementación del voto activo (Aragón 2007) de las personas en prisión preventiva desde la prueba piloto realizada en 2021 hecha a partir de la sentencia *SUP-JDC-352/2018* y *acumulado* hasta su ejecución a nivel nacional en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, con un enfoque que abarca desde la logística operativa electoral hasta los resultados del ejercicio, lo que fue posible gracias al despliegue de una serie de actos jurídicos y materiales.

El marco conceptual del trabajo se basa en el garantismo jurídico de todas las *personas humanas* (Ferrajoli 2016) y las principales variables a considerar son: el marco normativo, México en el contexto Latinoamericano, el reto logístico en los centros penitenciarios, el porcentaje de participación y finalmente algunas conclusiones.

¹Subdirectora de Circunscripción Plurinominal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral.

²Jefe de Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral.

Introducción

La inclusión del voto activo para las personas en prisión preventiva en México ha sido un tema de creciente relevancia en el ámbito jurídico y social. A medida que la democracia mexicana evoluciona, surge la necesidad de garantizar la participación política de todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal. Este artículo se propone analizar la implementación del voto activo para este grupo desde una perspectiva descriptiva, centrándose en la prueba piloto de 2021 y su desarrollo en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

La privación de la libertad a menudo conlleva la pérdida de derechos políticos, incluyendo el derecho al voto. Sin embargo, la prisión preventiva no debe ser confundida con una condena, y la exclusión de estas personas del proceso electoral plantea serias preguntas sobre la justicia y la equidad del sistema democrático. La sentencia SUP-JDC-352/2018 representa un hito importante en el reconocimiento de estos derechos, permitiendo que un número significativo de ciudadanos en prisión preventiva pueda ejercer su derecho al sufragio.

Marco Teórico

Garantismo Jurídico

El garantismo jurídico, según Ferragoli (2016), establece que todos los individuos, sin distinción, deben ser tratados con respeto a sus derechos fundamentales. Este enfoque se erige como un principio central para justificar la inclusión del voto de las personas en prisión preventiva. La idea es que, a pesar de las restricciones impuestas por el sistema penal, estas personas siguen siendo ciudadanos con derechos políticos.

La importancia del garantismo radica en su capacidad para proteger los derechos humanos y asegurar que todos los individuos, independientemente de su situación legal, tengan voz en

la toma de decisiones políticas. Este marco teórico es esencial para comprender la lógica detrás de la implementación del voto activo en el contexto de la prisión preventiva.

La legislación mexicana ha estado en constante evolución en torno a los derechos políticos de las personas en prisión preventiva. La sentencia SUP-JDC-352/2018 marcó un hito al permitir la implementación de mecanismos para facilitar el ejercicio del voto a este grupo. Esta sentencia y los subsiguientes actos jurídicos han sido fundamentales para garantizar su derecho al sufragio.

El marco normativo actual carece de claridad respecto a la situación de las personas en prisión preventiva, lo que resalta la necesidad de reformas legislativas que aseguren su inclusión en el proceso electoral. Esto implica no solo cambios en la legislación, sino también una transformación en la forma en que se percibe a las personas privadas de libertad en la sociedad.

Análisis de la Prueba Piloto de 2021

La prueba piloto de 2021 tuvo como objetivo evaluar la viabilidad de implementar el voto activo en los centros penitenciarios. Se llevaron a cabo encuestas y entrevistas para recoger datos sobre la percepción y el conocimiento del derecho al voto entre las personas en prisión preventiva, así como sobre los desafíos logísticos asociados.

Se adoptó un enfoque cualitativo y cuantitativo, combinando encuestas estructuradas con entrevistas en profundidad a un grupo seleccionado de personas en prisión preventiva y personal encargado de la administración electoral en los centros penitenciarios. La recolección de datos se realizó en varios centros de reclusión, lo que permitió obtener una visión más amplia y representativa.

Los resultados de la prueba piloto mostraron un interés significativo en el ejercicio del voto, aunque también se identificaron múltiples obstáculos, como la falta de información y la

infraestructura inadecuada en los centros penitenciarios. La participación fue variable, reflejando tanto el entusiasmo como la desconfianza hacia el sistema electoral.

Principales Hallazgos

Un porcentaje considerable de los encuestados manifestó interés en participar en el proceso electoral, lo que indica que la exclusión del voto puede ser percibida como una injusticia.

Las principales barreras incluyeron la falta de información sobre el proceso electoral, el temor a represalias y la desconfianza en la efectividad del sistema para asegurar un voto libre y secreto.

Se sugirió la implementación de programas de sensibilización y capacitación para mejorar la comprensión de los derechos políticos y la importancia de participar en el proceso democrático.

Implementación en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

Logística Operativa Electoral

La logística operativa fue un aspecto crucial en la implementación del voto activo en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. Se establecieron protocolos específicos para garantizar el acceso al voto en los centros penitenciarios, incluyendo la capacitación del personal electoral y la implementación del operativo de votación.

Se llevaron a cabo sesiones de capacitación para el personal encargado de supervisar el proceso electoral en los centros penitenciarios, asegurando que comprendieran los derechos de las personas en prisión preventiva y la importancia de un proceso justo.

La implementación del operativo de votación para facilitar el ejercicio del voto en diferentes áreas de los centros penitenciarios, lo que permitió que más personas pudieran participar sin enfrentar dificultades logísticas.

Resultados de Participación

Los datos preliminares del Proceso Electoral 2023-2024 indicaron un aumento en el porcentaje de participación en comparación con la prueba piloto de 2021. Sin embargo, la participación seguía siendo inferior a la de la población general, lo que sugiere que persisten barreras que deben abordarse para lograr una inclusión plena.

Se observó un incremento significativo en el número de personas en prisión preventiva que ejercieron su derecho al voto, aunque todavía representaba solo un porcentaje menor de la población total de estos centros. La participación estuvo influenciada por factores como el nivel de información disponible, la percepción de seguridad en el proceso y la confianza en el sistema electoral.

Contexto Latinoamericano

Comparación Regional

En el contexto latinoamericano, varios países han adoptado medidas similares para garantizar el voto de las personas en prisión preventiva. Se examinarán ejemplos de naciones como Brasil y Argentina, donde se han implementado reformas exitosas. La comparación permitirá identificar mejores prácticas y lecciones aprendidas que podrían ser aplicables en México.

Ejemplos de Éxito

Brasil: En Brasil, se han implementado mecanismos específicos que permiten a las personas en prisión preventiva votar en las elecciones. Esto ha servido como modelo para otras naciones en la región.

Argentina: La legislación argentina permite la participación de las personas privadas de libertad en elecciones nacionales, lo que ha llevado a un aumento en la inclusión política de este grupo.

Desafíos Logísticos en los Centros Penitenciarios

Los retos logísticos han sido significativos, incluyendo la necesidad de adaptar la infraestructura de los centros penitenciarios para facilitar el ejercicio del voto. La falta de recursos y personal capacitado ha representado un obstáculo importante en la implementación efectiva del voto activo.

La sensibilización sobre los derechos políticos y la educación cívica son fundamentales para fomentar la participación de las personas en prisión preventiva. Programas de capacitación y talleres informativos son necesarios para garantizar que este grupo conozca sus derechos y cómo ejercerlos.

Algunas conclusiones

La implementación del voto activo para las personas en prisión preventiva en México es un paso significativo hacia la inclusión política y el fortalecimiento de la democracia. A pesar de los avances logrados desde la prueba piloto de 2021 y durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, persisten desafíos que requieren atención.

Es fundamental continuar trabajando en la mejora de la logística electoral, la infraestructura en los centros penitenciarios y la educación cívica, para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal, puedan ejercer su derecho al voto de manera efectiva y significativa. La inclusión de las voces de las personas en prisión preventiva no solo fortalece la democracia, sino que también contribuye a la construcción social.

Bibliografía

Aragón, M. (2007). Voto activo y ciudadanía. Revista de Estudios Políticos.

Ferragiolli, L. (2016). Garantismo jurídico y derechos humanos. *Revista de Filosofía del Derecho*.

González, M. (2022). La prisión preventiva en México: Un reto para la justicia social. *Revista de Estudios Penitenciarios*, 14(1), 23-42.

López, R. (2020). El derecho al voto de las personas en prisión preventiva en México: Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos. *Revista Mexicana de Derecho Penal*, 12(3), 45-67.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2023).

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Informe sobre derechos políticos.

Sentencia SUP-JDC-352/2018. (2018). Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Instituto Nacional Electoral. (2023). Informe

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Estadísticas sobre el Sistema Penitenciario.